



Advocacy for Human Rights in the Americas

Iván Velásquez
Ministro de Defensa
Bogotá, Colombia

29 de febrero 2024

Estimado ministro Velásquez:

Reciba de la oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) un gran saludo. Siempre apreciamos la oportunidad de poder escucharle y dialogar con Ud. Desde WOLA, seguimos profundamente preocupados por la situación de inseguridad que enfrentan los y las líderes sociales y las comunidades rurales—especialmente las étnicas—en Colombia. Casi a diario nos llegan denuncias y pedidos de SOS acerca de ataques, amenazas de muerte u otros tipos de persecución. Actualmente, se están produciendo situaciones graves de asesinatos, seguimientos y hostigamientos a los defensores de los DD. HH. en el Cauca, Valle del Cauca, La Guajira, Putumayo y el Magdalena Medio.

Arauca, Norte de Santander y La Guajira

Recientemente, estuvimos en Arauca, Norte de Santander y La Guajira. Pese a los ceses bilaterales entre el gobierno de Colombia y dos de los grupos guerrilleros (el ELN y el EMC), y el anuncio de que se cesarían los secuestros por razones económicas, la realidad para los civiles sigue siendo muy temerosa. Los enfrentamientos armados entre los grupos ilegales y criminales continúan, afectando gravemente a las poblaciones atrapadas en el medio, quienes sufren restricciones de movilidad, confinamientos y desplazamientos internos forzados.

Se ha evidenciado una preocupante modalidad de los grupos ilegales que subcontratan a grupos más pequeños para asesinar o desaparecer a personas. Los grupos prosiguen con sus actividades ilícitas, incluyendo la extorsión o “vacunas” de guerra. También nos denunciaron que estos grupos se aprovechan de personas en situaciones de desespero, incluyendo indígenas y migrantes venezolanos, para involucrarlos en sus actividades. Hay un alto nivel de reclutamiento de jóvenes.

Varias personas entrevistadas nos expresaron que estos actos delictivos se dan frente o cerca de las fuerzas policiales y armadas, sin que se vea actuación por parte de estas. Muchos nos informaron que se sienten completamente desprotegidos y vulnerables frente a los grupos

1

ilegales y criminales. Ellos no ven en estos territorios un cambio en términos de seguridad pese a la política de Paz Total. Es importante que haya armonización y articulación de las políticas de seguridad, desmantelamiento de los grupos y la política de drogas.

Sobre La Guajira, nos preocupa la situación de seguridad de los líderes y autoridades Wayúu de la asociación Shipia Wayúu. Se encuentran en una situación muy precaria debido al alto riesgo que actualmente amenaza sus vidas como defensores de derechos humanos. Está pendiente un consejo de seguridad con estas autoridades indígenas sobre esta situación y esperamos que se pueda realizar lo antes posible.

Como Ud. sabe, WOLA trabaja con un amplio número de organizaciones de sociedad civil y autoridades afrodescendientes e indígenas. Estamos en contacto diario con muchos de ellos. En base de esto, quisiéramos resaltar varios asuntos que recibimos.

Clan del Golfo

Varios expresaron preocupaciones por la expansión del Clan del Golfo. Denuncian la convivencia que existe entre este grupo, así como la falta de acciones contundentes por parte de las fuerzas armadas para enfrentarlos. Se evidencia una nueva y alarmante modalidad de copamiento masivo de este grupo en territorios, con cientos de tropas armadas y uniformadas. Hay denuncias de que el Clan del Golfo está abandonando su vocación de supuesta autodefensa y pasando a autodenominarse el Ejército Gaitanista de Colombia. Se enfatizó la urgente necesidad de desmantelar estas estructuras que están aterrorizando a las comunidades.

Frente a estos grupos, surgen muchas interrogantes sobre si las instrucciones a las Fuerzas de Seguridad son realmente enfrentar y combatir estos grupos y hacer frente a sus masivas concentraciones de tropas en regiones como Córdoba, Bolívar y Antioquia, pues esto no está ocurriendo.

Se pregunta: ¿está considerando el gobierno aceptar las condiciones que exigen estos grupos para habilitarles una Mesa de Negociación? De abrirse una negociación, ¿cómo se manejaría el tema de abandonar los negocios ilegales y de narcotráfico? ¿Se sometería el gobierno a concederles el estatus político que exigen para su ingreso a un proceso de negociación política? ¿Por qué el Gobierno Nacional no ha presentado aún, más de un año y medio después de iniciada su gestión, el marco legal con el cual va a adelantar las negociaciones con los grupos paramilitares y las demás estructuras del crimen organizado? ¿Cuáles son los principios o líneas rectoras que el Gobierno tiene previsto para conducir las negociaciones con estas estructuras criminales?

Antioquia

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos ha denunciado la expansión paramilitar en el norte del país, con la concentración de grandes destacamentos de paramilitares en el Norte de Antioquia (Ituango, Briceño, Toledo, etc.) y el Nordeste de Antioquia (Segovia, Remedios, El

Bagre), en los cuales se concentran unos 300 o 400 paramilitares que actualmente tienen campamentos en las veredas Monte Alto y Chontaduro, en Ituango.

Pese a que el Gobierno ha aclarado que si los paramilitares no se someten a la justicia serán destruidos, lo que se observa en la región es la falta de voluntad de las fuerzas armadas del Estado para entrar en confrontación o frenar la expansión territorial de estos grupos. Durante varias semanas grupos denunciaron la llegada masiva del Clan del Golfo a Segovia y Remedios con el propósito de controlar la economía minera de la que dependen decenas de miles de pequeños y medianos mineros. Como respuesta, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 200 militares a esta zona para combatirlos.

Las comunidades denuncian que los militares no demuestran voluntad de enfrentar a los paramilitares. Ningún paramilitar ha sido detenido o neutralizado, y, por el contrario, parecen haberse acomodado a convivir con su presencia. La única opción que les quedó fue habilitar un corredor humanitario en Segovia para garantizar al CICR la entrada y salida de personas y ayuda humanitaria a las zonas que permanecen bajo el control de las AGC. A raíz de esto, los civiles continúan siendo objeto de confinamiento.

A pesar de haberse creado un comando específico para el combate a los paramilitares, el CCON5, no se ha frenado la expansión paramilitar en Antioquia, en el norte del país.

Magdalena Medio

Las organizaciones locales denuncian un avance paramilitar en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. El Clan del Golfo (AGC) ha ocupado los territorios de las extintas FARC y han posicionado en la zona urbana sus economías ilegales como la minería y el microtráfico, entre otras, cooptando las bandas ilegales locales. Se ve omisión y convivencia de policías y militares con el Clan del Golfo. La disputa que había con las disidencias de las FARC la ganaron la AGC y ahora la presencia del EMC es mínima.

Hay desplazamientos forzados y desplazamientos intra-urbanos. Se observa la nueva modalidad de atentar contra la vida de sus objetivos militares con el uso de artefactos explosivos, en lugar del sicariato tradicional. En el caso de Marina Pérez, lanzaron una granada donde estaba su nuera e hijo, aunque ella no se encontraba en su casa en ese momento. Adicionalmente, los grupos están involucrados en retenciones, tortura y asesinatos. Esto ocurre pese a la alta presencia militar en Barrancabermeja.

Después de que el Ministerio realizó su Consejo de Seguridad en Barrancabermeja, hallaron los cuerpos de dos desaparecidos en una fosa común en la Comuna 6, se realizó un atentado a una lideresa de DD. HH. y se incrementaron los enfrentamientos armados. La alcaldía ha puesto en marcha un plan de seguridad de 100 días, pero a los 50 días, la situación sigue crítica.

Nariño

En Los Pastos, las mujeres indígenas nos han notado un incremento de la extorsión a líderes y organizaciones de los territorios por parte de grupos armados. Se requiere implementar herramientas que garanticen el ejercicio de los liderazgos de las mujeres en los territorios. Para ellas, hay una falta de participación y garantías dentro y fuera de las estructuras organizativas.

Norte del Cauca

En el Norte del Cauca, hay un escalamiento del conflicto armado con un aumento en el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Existe una preocupante situación de inseguridad para los líderes y lideresas, constructores de paz y defensores de DD. HH. En esta zona circulan panfletos de las Águilas Negras con amenazas a un gran número de líderes y lideresas. Las comunidades han manifestado a nuestros aliados la zozobra que viven. Esta situación está fracturando los procesos organizativos. Partes del territorio están minadas, aumentando los riesgos.

Comunidades Étnicas Riohacha/Sierra Nevada

Recibimos un SOS de los consejos comunitarios de las comunidades negras ubicados al sur del distrito de Riohacha, al pie del monte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Denuncian que desde noviembre de 2023 el Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra y el ELN han aumentado su presencia en la zona. Miembros del Clan decidieron vivir dentro de los pueblos y pasan abiertamente por los comercios, etc. El 23 de febrero sacaron a la gente de sus casas para una reunión obligada en la cancha pública de la comunidad de Juan y Medio, donde dieron a conocer que llegaron para quedarse y que van a ejercer funciones de gobierno para mejorar las condiciones en la comunidad. Presentaron a cinco personas que serían encargadas de este.

Uno de los jefes de ellos apareció desmembrado y sus partes puestas en bolsas en la comunidad de Juan y Medio. El 24 de febrero comenzaron enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra que resultaron en muertes. La comunidad fue ordenada a encerrarse llevando a su confinamiento. Los consejos pidieron auxilio del gobierno local que estaba desarrollando un consejo de gobierno para atender la situación de desplazamiento de la comunidad Wiwa. Al parecer hubo enfrentamientos en sus comunidades paralelamente a las de las comunidades negras. Los líderes denunciaron sentirse abandonados por los militares, lo cual molestó al coronel del batallón Cartagena.

Indígenas Wiwas

Quisiéramos resaltar la solicitud de medidas urgentes para el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta que Ud. recibió el día 28 de febrero por parte de las ONG CAJAR y FIDH. Más de 300 indígenas del pueblo Wiwa, incluyendo mujeres, niñas y niños, se han visto desplazados forzadamente hacia Riohacha, mientras otras comunidades se encuentran confinadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con un alto riesgo de desplazamiento. Subrayamos el pedido de CAJAR y FIDH que se adopten “las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de

los y las integrantes del Pueblo Wiwa de la SNSM, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio”.

Le solicitamos respetuosamente que el Ministerio de Defensa tome acciones para garantizar las vidas de los líderes sociales y civiles anteriormente mencionados.

Respetuosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gimena Sánchez-Garzoli'.

Gimena Sánchez-Garzoli
Directora para los Andes
WOLA